

# En 15 días, gobierno Petro busca adjudicar contratos por cerca de \$ 3 billones

Entidades estatales avanzan en millonarias entregas en la recta final del cuatrienio. Reparos por el traslado de \$ 4 billones para la UNGRD.

SARA VALENTINA QUEVEDO DELGADO Y SABRINA DE JESÚS BASTIDAS - REDACCIÓN JUSTICIA Y UNIDAD DE DATOS

De forma exprés y a pocos días de la sucesión de mando en la Casa de Nariño, entidades del gobierno del presidente Gustavo Petro han buscado adjudicar contratos multimillonarios para amarrarlos durante dos o más años, lo que dejaría ‘manicruzado’ al gobierno en trante para modificar condiciones, montos u oferentes. Según los casos que han salido a la luz en investigaciones de EL TIEMPO, se trataría de más de 3 billones de pesos.

Este diario reveló tres millonarias licitaciones para adjudicar contratos de vigilancia y seguridad. Una en la Aerocivil, para la seguridad de los aeropuertos, por 78.000 millones de pesos y con señalamientos de ser un proceso ‘tipo sastre’; otra en la Superintendencia de Notariado y Registro (hoy clausurada), por 76.000 millones de pesos, para contratar el servicio de seguridad durante los próximos cuatro años y con señalamientos de ser un proceso ‘tipo sastre’; y una más en la Unidad para las Víctimas, por 26.000 millones de pesos, con el mismo propósito hasta diciembre de este año.

Estos casos apenas representan alrededor del 5 por ciento del total. El rosario de procesos contractuales que se busca o se buscaba adjudicar de forma exprés en la recta final del cuatrienio también incluye uno por 165.000 millones de pesos del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge), adscrito al Ministerio de Minas y Energía, para implementar sistemas solares fotovoltaicos en el marco del programa “Colombia Solar”.

Una queja radicada ante los entes de control denuncia que en ese proceso se habrían introducido “elementos subjetivos e ilícitos”, lo que correspondería a posibles pliegos de condiciones ‘sastre’, así como un presunto direccionamiento y un cronograma arbitrario que afectarían la transparencia y la libre concurrencia de oferentes. La irregularidad central señalada gira en torno al denominado “cupos de crédito”. En el diseño original del proceso, este no otorgaba puntaje alguno. De hecho, inicialmente el subdirector jurídico y el equipo técnico de Fenoge concepcuaron por escrito que calificar el cupo de crédito era ilegal. Aun así, el director ejecutivo de Fenoge, Brayan Gi-

raldo Ruiz, habría firmado la Adenda n.º 3, que convirtió ese cupo en un criterio de calificación con cinco puntos.

Otra de las alertas recae sobre la contratación del Fondo Nacional de Turismo (Fontur) durante el período 2022-2026, sobre la cual el equipo de empalme de Abelardo De La Espriella pidió información detallada para verificar una serie de hechos que generan suspicacias sobre la transparencia y legalidad en el manejo de los recursos.

Entre ellos, menciona una presunta concentración de contratos en tres empresas o grupos empresariales, con una participación desproporcionada del presupuesto de contratación; posibles irregularidades en

la conformación de uniones temporales y una presunta aprobación acelerada de proyectos de inversión e infraestructura durante la transición presidencial.

Pero los contratos de última hora no paran ahí. Veinticuatro horas antes de la posesión de Abelardo De La Espriella, Colpensiones tiene previsto firmar un jugoso contrato de interventoría por 15.462 millones de pesos para supervisar la migración del centro de datos de los afiliados de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), un proyecto cuyo contrato principal asciende a 223.000 millones de pesos.

Se trata de una contratación de régimen especial, con invitación a presentar ofertas, que, de acuerdo

con el cronograma publicado en la plataforma de contratación pública Secop, se suscribirá el próximo 6 de agosto a las 8 de la mañana, apenas un día antes de la posesión del nuevo presidente. El objeto del contrato es supervisar la operación del centro de datos, incluido el monitoreo de todas las plataformas y aplicaciones que utilizan los afiliados de Colpensiones.

EL TIEMPO estableció que detrás del millonario contrato estaba la Unión Temporal Gestión Integral Centros de Datos 2025, conformada por The IT Experts SAS -que aparece en otras licitaciones de última hora-, Rit Enterprise Solutions SAS e IOGestión SAS, firmas que, según expedientes contractuales en poder de este

diario, han celebrado contratos con entidades como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el ICBF y hasta la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares. El plazo de ejecución del contrato iría hasta diciembre de 2029.

Otro de los procesos bajo la lupa corresponde a una licitación pública de Colombia Compra Eficiente para suscribir un acuerdo marco de precios por 300.000 millones de pesos, destinado a la contratación de servicios de ciberseguridad, estructurados en segmentos funcionales y con cobertura en todo el territorio nacional.

Según el cronograma del proceso, el contrato se firmará el próximo 26 de octubre y tendrá un plazo de ejecución de dos años. Sin embargo, de acuerdo con la alerta elevada ante los entes de control, existen sospechas de una posible colusión entre oferentes e, incluso, de un presunto favorecimiento a un fabricante específico.

A la lista se suma un contrato por 33.000 millones de pesos en Fiduprevisora para el alquiler de computadores y portátiles destinados a los funcionarios durante los próximos tres años. En ese proceso, los entes de control habían advertido inconsistencias en los indicadores financieros y en los estudios de mercado. Sin embargo, este diario reveló el concepto jurídico del exmagistrado Rubén Darío Henao que destrabaría la adjudicación.

También figura un contrato de gestión documental de la Aerocivil que pasó de 400 millones a más de 12.000 millones de pesos, por el que renunció una funcionaria alegando presiones.

Y un contrato exprés por 78.000 millones de pesos le costó al Gobierno, a una semana de entregar el mando, una protesta de los escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP). El proceso tiene por objeto la “provisión e implementación de personas de protección” y, según el clasificador de servicios, los perfiles corresponden a “Seguridad y Protección Personal” y “Servicios de Guardias”, con cues-

tionamientos de que habría sido diseñado ‘tipo sastre’.

El proceso coincide con la expedición de dos decretos que modifican los requisitos para ingresar como escolta y crean más de 6.000 nuevos puestos. De esos, 1.170 corresponden a cargos que ya existían en una planilla temporal creada en 2024 y que ahora pasarían a ser permanentes, mientras que los 5.700 restantes son empleos completamente nuevos.

Las alertas también alcanzan al Ministerio de la Igualdad, donde, justo semanas antes de su liquidación por no subsanar los vicios de trámite encontrados por la Corte Constitucional al proyecto de ley que le dio origen, se han estado cocinando contratos por más de 68.000 millones de pesos a través del Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial (Fonigualdad).

En varios de esos millonarios procesos de adjudicación aparecen empresas contratistas que hoy están bajo la lupa por haber sido mencionadas en escándalos de corrupción, como el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

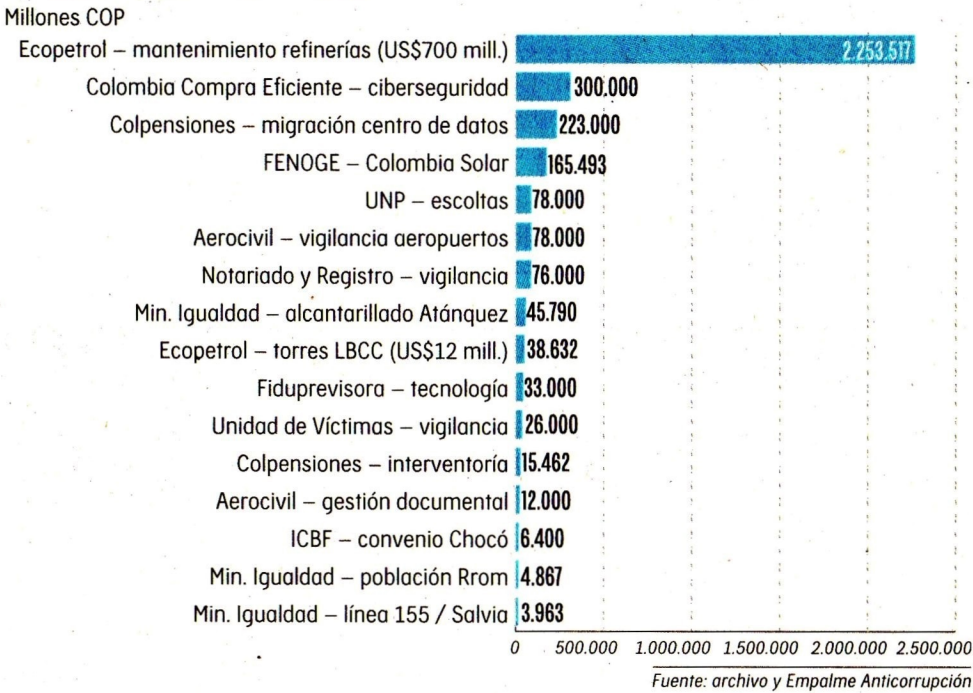
La mayor cuantía corresponde a contratos de mantenimiento y paradas de planta de las refineras de Cartagena y Barrancabermeja de Ecopetrol, por más de 700 millones de dólares -equivalentes a unos 2.253.517'000.000 pesos al cambio- que la propia entidad suspendió de manera temporal tras denuncias sobre un supuesto pago de coimas. Otro de los contratos corresponde a las torres de fraccionamiento del Proyecto Línea Base Calidad de Combustibles, por más de 12 millones de dólares, señalado por presunto direccionamiento.

Ese bloque de mantenimiento, por sí solo, representa la mayoría del total. Los demás contratos suman 1.106.607'000.000 pesos. Aunque las cifras podrían ser aún más altas.

El gobierno electo de Abelardo de La Espriella también cuestionó un traslado presupuestal ordenado por el presidente Petro, en el que se moverían 4 billones de pesos al presupuesto de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para atender el fenómeno de El Niño a través de proyectos de energía solar.

Mientras tanto, Transparencia por Colombia señaló en un informe que entre el 22 de junio y el 10 de julio de 2026, las entidades públicas firmaron 43.092 contratos por 7.674.921'191.723 pesos. De ese total, las entidades del Gobierno Nacional concentraron 3,4 billones de pesos (el 45 por ciento). Además, dos de cada tres de esos contratos se hicieron por contratación directa y el 96 por ciento de esas adjudicaciones fue para vincular personas a través de la prestación de servicios.

## LOS CONTRATOS DE MAYOR CUANTÍA



El presidente Gustavo Petro interviene durante uno de sus más recientes consejos de ministros. FOTO: CORTESÍA